

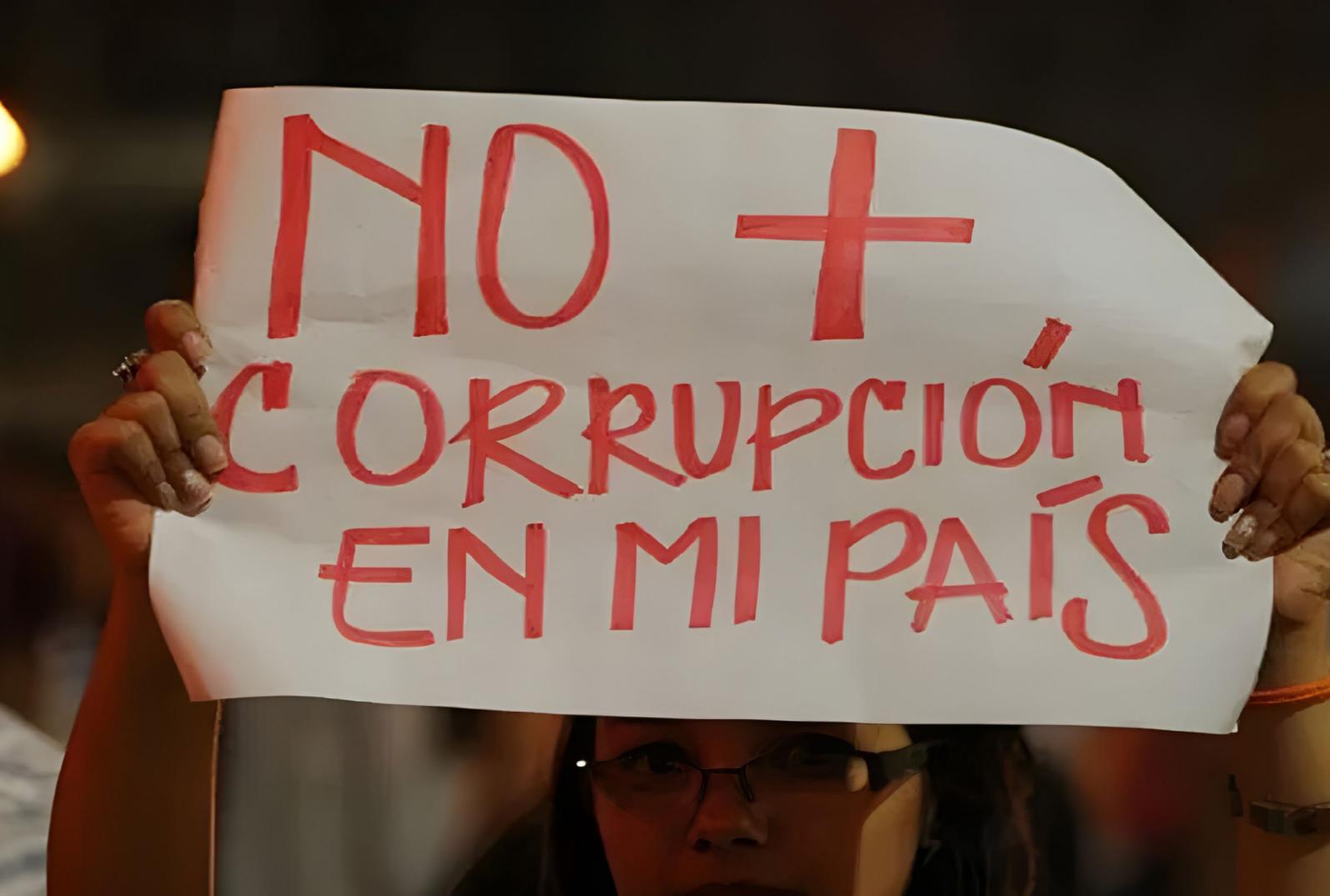


# EL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS DERECHOS HUMANOS EN LA GUAJIRA

Hace algunos meses, tuve la oportunidad de visitar una comunidad Wayúu en La Guajira. Allí conocí a Ana, una abuela que, con dolor en su voz, me contó sobre las luchas diarias que enfrenta para conseguir agua potable y alimento para sus nietos. Su relato es solo uno entre miles en una región donde la corrupción no solo ha robado recursos, sino también la esperanza y dignidad de sus habitantes.

La corrupción, lejos de ser un problema meramente financiero, es una grave violación a los derechos humanos. Tanto la ONU como la CIDH han señalado cómo afecta directamente a las poblaciones más vulnerables y discriminadas. La Guajira es un claro ejemplo de esta trágica realidad.

Entre 2016 y 2020, el Monitor Ciudadano de la Corrupción documentó 37 casos de corrupción en La Guajira, un 30% de los cuales impactó directamente a niños y adolescentes. En los últimos diez años, 12 gobernadores han sido destituidos por malversación de fondos, muchos de ellos relacionados con recursos destinados a la alimentación infantil. La Procuraduría General ha alertado sobre 64 expedientes de corrupción que llevan más de una década sin resolverse, involucrando más de 85.000 millones de pesos. Y entre 2013 y 2015, la Contraloría detectó pérdidas de casi 17.000 millones de pesos en programas destinados a la nutrición infantil.



La gravedad de la situación en La Guajira llevó a la Corte Constitucional, en 2017, a declarar un estado de cosas inconstitucional debido al hambre que sufre la niñez wayúu. La Sentencia T-302 no solo ordenó medidas para garantizar el acceso al agua, la alimentación y la salud, sino que también subrayó la necesidad de transparencia en la selección de contratistas. En diciembre de 2021, como parte del seguimiento a esta sentencia, la Corte solicitó información sobre la corrupción en la región, a la que organizaciones como de Justicia y Transparencia por Colombia respondieron con informes detallados y recomendaciones.

El reciente escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) subraya aún más el impacto letal de la corrupción. Los fondos destinados a emergencias y desastres fueron desviados hacia bolsillos pri-

vados, poniendo en peligro la vida de miles de colombianos. Esto no solo es inaceptable, sino un crimen que amenaza directamente la vida y el bienestar de las comunidades más vulnerables.

Para combatir este flagelo, es crucial implementar medidas que garanticen la transparencia y el fortalecimiento institucional. La Corte Constitucional debería encargar a la Procuraduría General una evaluación sobre las garantías de acceso a la información pública en La Guajira, particularmente en municipios como Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Sobre la base de esta evaluación, las entidades públicas deben diseñar un plan de fortalecimiento en materia de acceso a la información y crear un registro centralizado y público de los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado.

Para fortalecer nuestras instituciones, es fundamental implementar los parámetros de ética e integridad pública ya existentes, como las directrices del Sistema Nacional de Integridad y el Código de Integridad del Servicio Público. Además, el Gobierno Nacional debe revisar la estructura administrativa, los mecanismos anticorrupción y los canales de denuncia en las entidades departamentales.

En cuanto a la sanción de la corrupción, la Fiscalía y la Procuraduría deben coordinar esfuerzos para priorizar los casos en La Guajira, mientras que la Contraloría General debe acompañar a la Contraloría Departamental para fortalecer sus capacidades de control fiscal.

La corrupción no es una cultura, es un cri-

men. Cada peso robado es un plato de comida que falta en la mesa de un niño, un medicamento que no llega a un enfermo, o agua potable que no alcanza a nuestras comunidades. Debemos dejar de tolerar la corrupción como algo inevitable. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos exigir transparencia y responsabilidad a nuestros líderes. La corrupción nos roba no solo recursos, sino también nuestro futuro.

Es hora de decir basta. Es hora de exigir transparencia, integridad y justicia. Trabajemos juntos para garantizar que todos los guajiros tengan acceso a sus derechos fundamentales: agua, alimentación, salud y seguridad. Juntos, podemos erradicar la corrupción y construir un futuro más justo y equitativo para nuestras comunidades.



**JUANA**  
**CORDERO**

X [juanacorderom](#)

@ [juanacorderomoscote](#)